



Ministerio de Economía

RESOLUCIÓN No. 199

MINISTERIO DE ECONOMÍA: San Salvador, a las ocho horas con diez minutos del día veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Visto el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada ESTELA NOEMY DURAN GUTIÉRREZ, en su calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial de la señora **VIRGINIA DE JESÚS MAGARIN DE RAMÍREZ**, en contra de la Resolución número 361 de fecha dos de octubre de dos mil quince, y en la que la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio condena a su representada al pago de una multa de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$24,660.00)**.

LEIDOS LOS AUTOS y

CONSIDERANDO:

- I. Que por Resolución número 361 pronunciada por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio, en esta ciudad, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día dos de octubre de dos mil quince, se impuso a la señora **VIRGINIA DE JESÚS MAGARIN DE RAMÍREZ** una multa de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$24,660.00)** por infracción al artículo 16 de la Ley de Minería;
- II. Que no estando conforme con la Resolución antes referida, la señora Virginia de Jesús Magarín de Ramírez, por medio de la Licenciada Durán Gutiérrez en el carácter dicho, interpuso Recurso de Apelación para ante el señor Ministro de Economía, por medio de escrito presentado el día veintiséis de octubre de dos mil quince, manifestando: Que la Dirección de Hidrocarburos y Minas no señaló día y hora para el examen de testigos ofrecidos en el escrito presentado el día uno de octubre de dos mil quince ante dicha Dirección, en la cual propuso a los señores Juan Carlos Soriano Martínez y Carlos Orlando Solano como testigos, violando así el derecho de defensa, legalidad, contradicción y de audiencia sustentado en el artículo 11 de la Constitución de la República, así mismo manifiesta que al adjudicarle a su representada la explotación a través de la extracción de material en un terreno propiedad de ella, no ha probado el enriquecimiento, por lo que la actividad acreditada a la señora Magarín de Ramírez no está contemplada en la Ley debido a que el artículo 1 regula: "Extracción de material pétreo

c) Que en las declaraciones juradas se constata que a la persona que le solicitaron ayuda mediante carta, fue a la señora Magarín de Ramírez; a folios 26 consta documento de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; a folio 32 consta Declaración Jurada del señor Juan Carlos Soriano Martínez en la cual expresa: *"(a) únicamente el lucro lo obtuvo él de forma personal realizando los viajes con sus camiones al centro escolar, (b) Del lucro que personalmente obtuve y de los cuales la Escuela Centro Escolar Católico "Presbítero Marcial Serrano" de El Rosario, departamento de La Paz me extendió los recibos del monto que ellos me pagaron por los viajes, el primero el día nueve de abril de dos mil quince por un monto de TRES MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el segundo el día veintinueve de mayo de dos mil quince por un monto de TRES MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el tercero el día siete de agosto de dos mil quince por un valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Que voluntariamente acepto que las autoridades correspondientes comprueben por los mecanismos y procesos que estimen convenientes, todo lo dicho que declaro mediante la presente acta notarial"*. A folio 35 consta Declaración Jurada del señor Carlos Orlando Solano, en la que expresa que se ha dado cuenta que la señora Magarín de Ramírez nunca ha vendido ni se ha lucrado con la remoción de tierra. A folios 38, 39 y 40 constan los recibos antes mencionados. De lo anterior, se deduce que el interés por realizar los trabajos de aprovechamiento, extracción y procesamiento del material, y quien trasladó el material, fue el señor Martínez Soriano. No existen evidencias en el expediente que permitan deducir que la señora Magarín de Martínez había estado explotando el material pétreo extraído, sino que fue el señor Martínez Soriano el que estaba realizando las actividades mineras sin autorización, lucrándose económicamente de dicha actividad.

VI. Que por las razones antes expuestas, se hace referencia a la Presunción de Inocencia como regla de juicio, y que no se agota en la simple prohibición de la condena de la duda, sino también en la necesidad de que la condena se funde en auténticas pruebas que, además, han de ser aportadas por la acusación, debiendo éstas ser suficientes, pues si la culpabilidad no ha quedado probada no podría la Administración entender desvirtuada la inocencia; es por ello que la regla "in dubio pro reo" debe de ser entendida como una garantía constitucional derivada de la Presunción de Inocencia, cuyo ámbito de eficacia es el de la fijación de los hechos en la Resolución, pues exige que el juzgador alcance la certeza sobre todas las circunstancias de la imputación, como presupuesto para la aplicación de una sanción. En ese sentido, este Ministerio considera que existen evidencias suficientes para determinar la existencia del hecho sancionable, pero que la resolución impugnada no consideró la actividad realizada y expresamente reconocida por el señor Juan Carlos Soriano Martínez, como la "actividad



Ministerio de Fomento

minera" que carecía de la debida autorización; y aunque la Recurrente es la que asume haber solicitado autorización ante la Alcaldía de San Luis Talpa, no se ha establecido en el proceso que sea la persona que realizó actividades mineras sin la autorización legal respectiva. En consecuencia, no existen elementos de juicio suficientes para establecer su responsabilidad en la infracción que dio inicio al proceso sancionatorio respectivo, y es procedente absolverla de responsabilidad, pero esto no exime de que se inicien las diligencias respectivas para deducir responsabilidad en contra de la persona que ha reconocido realizar actividades de explotación minera sin la autorización correspondiente.

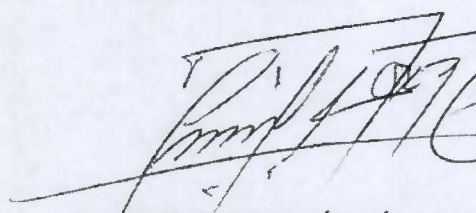

POR TANTO:

Con base en las razones antes expuestas, disposiciones legales citadas, y a los artículos 11, 12, 86 Inc.3º, y 246 Inc.2º de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5 letra c), 6 letra g), 16, 45, 69 Inc. 3º y letra a) de la Ley de Minería, este **MINISTERIO**

RESUELVE:

- 1) **REVÓCASE** la Resolución número TRESCIENTOS SESENTA Y UNO pronunciada por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio, en esta ciudad, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día dos de octubre de dos mil quince, por cuanto no existen elementos de juicio suficientes que determinen la responsabilidad de la señora VIRGINA DE JESÚS MAGARIN DE RAMÍREZ, en las actividades mineras realizadas sin la autorización respectiva.
- 2) **DEVUÉLVANSE** estos autos a la Oficina de su origen, para los efectos consiguientes.

NOTIFÍQUESE.



THARSIS SALOMÓN LÓPEZ GUZMAN
MINISTRO

Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe Edificio C1 - C2,
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono (PBX): (503) 2247-5600

